

COLOCAR EL ACUERDO DE PAZ EN LA AGENDA DE WASHINGTON

Camilo González Posso

Presidente de INDEPAZ

Bogotá D.C. 2 de febrero de 2021

Cuando la Canciller de Colombia, Claudia Blum, informó el pasado 29 de enero de 2021 de su primera conversación con el secretario de Estado de Biden mencionó las prioridades de la agenda bilateral y, *curiosamente*, no incluyó el apoyo a la implementación de los acuerdos de paz. Es curioso porque en las semanas siguientes a la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, el embajador Philip Goldberg ha repetido que, junto con la colaboración para enfrentar a la pandemia del COVID 19, ese apoyo al acuerdo de paz está como prioridad en la agenda. La lista divulgada por la Embajada de EE. UU en Colombia, ubica esos dos temas en la primera línea y después los del narcotráfico, comercio, cambio climático y derechos humanos.

¿Se trata de una omisión de la canciller o de un desfase entre el embajador y sus jefes en Washington? No es una cuestión menor si tenemos en cuenta que una pluma en la balanza internacional puede modificar sustancialmente asuntos decisivos para la paz de Colombia en el difícil tránsito al posconflicto. Por eso sí hace diferencia que la Canciller interactúe con la nueva administración poniendo el énfasis en el combate al narcotráfico y en la injerencia en Venezuela.

Diálogos de paz con EE. UU

El gobierno de Iván Duque y su mentor Álvaro Uribe Vélez hicieron lo que estaba a su alcance para apoyar la campaña de reelección de Donald Trump buscando dar continuidad al papel de Colombia como aliado incondicional en la región en una versión renovada de la guerra antidrogas y en la ola ultra neoliberal de la derecha internacional.

“Primero América para los americanos” fue un lema de convergencia que significó para Trump intentar retomar el control en un continente que se ha estado diversificando en alianzas, origen de las inversiones extranjeras y relaciones comerciales. Con el pretexto de la guerra antidrogas y al terrorismo, contra las potencias extracontinentales y el socialismo – castrochavista, Trump alineó a Colombia y trató a Iván Duque con desprecio despótico y regaños anticipados por falta de diligencia en las metas antidrogas.

Las relaciones bilaterales las metieron en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos como ocurrió con las políticas migratorias, o con el intento de revivir el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca – TIAR – y la OEA como mecanismos de subordinación. La crisis de esos instrumentos siguió manejándose desde Washington con la redefinición de los TLC en términos más desiguales para Latinoamérica, acuerdos de asistencia militar, de uso de bases en Colombia y otros lados y con aparatos *ad hoc* como el llamado “Grupo de Lima” destinado a cubrir operaciones neo-intervencionistas en varios países de Centro América, en Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre otros.

En la era Trump la paz de Colombia salió del orden del día y quedaron algunas gestiones heredadas de la administración Obama – Biden, como el monitoreo a algunos aspectos de implementación del Acuerdo Final (2016) en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y algunos proyectos de USAID.

Con toda esta historia reciente tiene más relevancia la posibilidad de un respaldo expreso de la administración de Joe Biden a la implementación de los acuerdos de paz, como sugieren las declaraciones del embajador Philip Goldberg, cuando mostró la disposición a aumentar la cooperación “para hacer algo diferente”, en temas como avances en la integración de excombatientes, aumento de la seguridad para líderes en áreas afectadas por asesinatos y masacres. También se podría esperar mayor cooperación en asuntos que viene apoyando USAID, como los de justicia comunitaria o, al decir del embajador, “apoyando el desarrollo económico en áreas rurales, dando títulos de propiedad y a la coordinación humanitaria para atender a los refugiados venezolanos”. (El Tiempo, 01/24/202)

¿Qué alcance puede tener esa frase que propone “algo diferente” en la cooperación de Estados Unidos para la implementación de los acuerdos de paz? Muchos, especialmente en la coalición uribista del gobierno, le apuestan a que en la práctica sea “poco diferente” y los analistas académicos recuerdan una y otra vez que hay una matriz de continuidad de largo aliento en la política bipartidista hacia Colombia. Pero para seguir el juego de palabras, en ese “poco diferente” puede estar la diferencia para reducir cualquier presión internacional hacia otra guerra en Colombia, ahora bajo la forma de guerra antidrogas fase 2.

En el primer año de la administración demócrata en los Estados Unidos, sectores interesados en que se cierren definitivamente las confrontaciones armadas y la amenaza de guerras en Colombia pueden lograr pequeños cambios. Algunos de esos sectores tienen eco en el Congreso de los Estados Unidos, como lo han mostrado mociones y mensajes encabezados por decenas de congresistas, aliados con organizaciones de sociedad civil que mantienen el monitoreo y defensa de soluciones pacíficas en Colombia.

Lograr que el gobierno de los Estados Unidos y las mayorías políticas de ese país, mantengan un discurso y un reclamo continuo a favor de la implementación de los pactos de paz en Colombia, sería un primer logro y hay buenas señales en esa dirección. Esto importa por supuesto en el apoyo a la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y en el seguimiento trimestral que hace el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir de informes del Secretario General de la ONU. En este mismo plano es clave el diálogo permanente del Departamento de Estado de EE. UU. con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

En el pasado, frente al Plan Colombia, se ensayaron alianzas de sociedad civil, dentro de lo que se llamó “diplomacia por la paz”, para ampliar la audiencia e incidencia en sectores de la administración y del Congreso de EE. UU. que siguen la situación de Colombia preocupados por las violaciones contra los derechos humanos y la utilización indebida de recursos de asistencia militar o de cooperación. Gracias a gestiones como esa se pueden ensayar nuevos controles y condicionamientos que le pongan atención a la corrupción desenfrenada en el uso de esos recursos al servicio de grupos entronizados en el Estado y en la fuerza pública en Colombia. Las acciones de esa alianza de hecho, sociedad civil de Estados Unidos y Colombia, pueden ampliar experiencias de impacto en medios de comunicación, en la academia y entre iglesias históricas pacifistas.

La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo ha sido y seguirá siendo una preocupación central de los gobiernos estadounidenses. La cuestión relevante para la paz es si la nueva administración de Joe Biden retomará el discurso y las estrategias que apoyó cuando se negoció en La Habana el Acuerdo Final de Paz para la terminación del conflicto, el mismo que se firmó en Cartagena en agosto de 2016 en presencia de Biden, cuando llegó a respaldarlo en nombre del gobierno de Estados Unidos y con instrucciones del presidente Obama. Ese acuerdo establece una interrelación entre reforma rural, democratización, seguridad, reincorporación, justicia y política sobre drogas. La superación del problema crucial del narcotráfico y de los círculos de violencia en Colombia, tienen en la implementación integral del acuerdo su piedra angular y así fue comprendido por las partes firmantes, por el Estado colombiano que lo suscribió y ratificó, por los países que acompañaron las negociaciones y se comprometieron a apoyar la implementación.

Las cartas de Uribe a Biden

El uribismo reaccionó rápidamente ante la derrota de Trump y consignó en un memorando sus ideas para recomponer el diálogo con la nueva administración. Más que una carta a Biden es un texto incoherente con reflexiones erráticas sobre política internacional, pero muy directo en lo que toca al futuro de las relaciones Biden – aliados de Trump en Colombia. De entrada, Uribe le recuerda a Joe Biden que fue un buen amigo en el Plan Colombia pero que se volvió cómplice de la impunidad y de la entrega del país al narcoterrorismo al apoyar el acuerdo de La Habana.

“Sin el apoyo de los Estados Unidos y del delegado Aronson, dice Uribe recriminando a Biden, la firma con la Farc habría sido diferente. Cuando el No ganó el plebiscito, los Estados Unidos, con la autoridad de haber sustentado el acuerdo de La Habana, pudieron jugar un papel para el pacto nacional que propusimos, pero no lo hicieron. Se consumó la impunidad total que en nombre de la Paz ha traído más violencia auspiciada por el narcotráfico”. (Vélez, 8/11/2020)

Pero Uribe Vélez no se queda pasando una cuenta de cobro pues de inmediato hace una extraña propuesta en la lucha común contra el narcoterrorismo: “La eliminación de la droga, *de la mano del cuidado remunerado de la selva, la Amazonía, por ejemplo*, es un imperativo que requiere todo el apoyo del Gobierno Biden”. Le agrega el llamado a escalar acciones de todo tipo en contra del régimen de Maduro en Venezuela siguiendo el camino de Trump para declararlo formalmente como promotor del terrorismo, del narcotráfico y enemigo de la seguridad del continente, de Colombia y de los Estados Unidos. Y después de desvariar sobre lo que tendría que hacer Biden con respecto a Corea, China y el Banco Mundial, termina diciéndole que se mantenga en los límites bipartidistas trazados allá por los amigos republicanos de la extrema derecha colombiana:

“El presidente Biden ha sido miembro descollante de la coalición bipartidista frente a Colombia. Hay que fortalecerla. Que haya todo el respeto de aquí para allá, del cual el Presidente Duque da ejemplo. Y que en los Estados Unidos también escuchen a quienes piensan diferente del pacto con Farc”. (ver el texto completo en

https://docs.google.com/document/d/173DI_FYsPzOfKXF6R67r9_NAGFBdiltbAO5Td00xOWo/edit)

Algunos han subrayado el debilitamiento de la capacidad de incidencia de la ultraderecha uribista en las esferas del poder en los Estados Unidos. Ya se había desacreditado con el fracaso de las maniobras conspirativas del embajador Francisco Santos y de su manifiesta desesperación cuando en el Departamento de Estado del mismo Trump le cerraron el micrófono y lo trataron como a un personaje errático. Sin embargo, tiene razón Álvaro Uribe cuando orienta sus tácticas en la nueva situación a amarrar acuerdos bipartidistas en un congreso que ahora cuenta con mayoría demócrata pero con un voto de diferencia con los republicanos y con muchos temas en la agenda dentro de la cual algunas concesiones a la línea guerrerista en Colombia podrían ser parte del juego.

El punto fuerte del Uribismo y sus aliados, en lo que toca a definiciones de Biden sobre Colombia, es intentar mantener la guerra anti-narcoterrorismo en el centro de las relaciones bilaterales. El sofisma es elemental. Premisas: el narcotráfico y el crimen transnacional es el mayor peligro en el continente desde la amenazada de choque nuclear cuando las bases soviéticas en Cuba – parte clave de esa amenaza son el acuerdo de paz con las FARC, Venezuela con un régimen terrorista y Cuba apoyando al ELN – Conclusión del sofisma: la política bipartidista en Estados Unidos debería ayudar a desmontar la impunidad y acuerdos antidroga con las FARC, radicalizar medidas contra Cuba y Venezuela y escalar los componentes militares y operaciones encubiertas en la región y en una nueva guerra interna contra el narcoterrorismo.

Otras cartas

La nueva administración se encuentra sobre la mesa varias iniciativas que están arrancando como la que se llamó Colombia Crece, que forma parte de un plan continental de inversiones de empresas de Estados Unidos apoyada para contrarrestar la influencia de China y mantener favorable la balanza de pagos. En agosto de 2020 se anunció Colombia Crece como una posibilidad de inversiones privadas en infraestructura y en inversiones grandes en zonas que han estado afectadas por la violencia; se ha hablado de una primera meta de US\$5.000 millones de dólares y de adoptar medidas regulatorias que faciliten esas inversiones y su seguridad en regiones con oportunidades minero-energéticas y para relocalización de empresas en la pos-pandemia. “Este es un **nuevo Plan Colombia para luchar contra el narcotráfico**, invertir y generar empleo”, dijo Adam Bohler, director general de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, cuando se presentó la iniciativa de proyectar para los próximos años US\$60.000 millones de dólares en Latinoamérica y de ellos el 9,4% en Colombia.

El “piloto” para iniciativas al estilo de Colombia Crece, lo está haciendo el gobierno con el programa Catatumbo Sostenible. En esa región han puesto los ojos importantes inversionistas, dada su posición estratégica para la agroindustria de palma y las grandes reservas de carbón y petróleo. El esquema es de ocupación militar en combate a grupos armados ilegales para controlar el territorio, reducir sustancialmente los cultivos de coca y el narcotráfico, avanzar con vías terciarias y otras de mayor alcance para la interconexión subregional y hacia ciudades cercanas.

Las grandes inversiones y las alianzas productivas agroindustriales se presentan como la alternativa de desarrollo, en contravía de propuestas desde las comunidades de dar prioridad a las economías asociativas de campesinos e indígenas de la región. Catatumbo Sostenible y Colombia Crece, si se proyectan como “nuevo Plan Colombia”, son apuestas de recolonización de territorios y de consolidación con seguridad para grandes inversiones asociada a repoblamiento y a disolución de economías endógenas. En este modelo de macroproyectos, no tienen cabida, como eje de otro desarrollo, las opciones de economía campesina de seguridad agroalimentaria, ni las Zonas de Reserva Campesina.

Lo último que se le ocurre a este tipo de iniciativa es hacer reforma agraria con entrega efectiva de tierras a los pequeños productores y a las comunidades étnicas y con programas de fomento de la producción de alimentos en modelos sostenibles o respetuosos con el ambiente. Este lado de los acuerdos de paz y de las propuestas campesinas no cabe en el modelo agroexportador y extractivista.

La iniciativa de Biden en 2016 se conoció como Paz Colombia, cuando el gobierno de Obama propuso reorientar la cooperación de Estados Unidos en sintonía con los acuerdos de paz.

“La nueva iniciativa tendrá tres pilares, según informaron desde la Casa Blanca: seguridad y antinarcóticos, reincorporando a las FARC a la sociedad; expandir la presencia del Estado para fortalecer el estado de derecho y las economías rurales, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto; y promover la justicia y servicios esenciales para las víctimas”.

Cabe preguntar si la administración Biden tomará en cuenta esos ejes en su apoyo a la implementación de los acuerdos de paz y cual podrá ser el contenido de cada eje. Por ahora, el embajador Philip Goldberg ha indicado que en materia de erradicación forzada los Estados Unidos siguen dispuestos a apoyar al gobierno colombiano, pero con un cambio que considera importante:

“Y tengo que decirle algo más que es muy importante. Dijo Goldberg en la entrevista mencionada. En esta oportunidad, la fumigación, la aspersión aérea, será responsabilidad total del Gobierno colombiano. Vamos a ayudarles en ciertos aspectos, pero ellos van a comprar el glifosato, ellos van a controlar los aviones, no son contratistas, como antes. Entonces ahora será completamente diferente, es un programa colombiano con ayuda”.

En otras palabras, el gobierno de los Estados Unidos no se hará cargo de la aspersión aérea. Hay que tener en cuenta que ya no tienen a Monsanto haciendo lobby para vender el agrotóxico en la guerra antidrogas, pues ahora el glifosato sería comprado a China o a su productor alemán que compró Monsanto y se encuentra en dura controversias y demandas por daño a la salud y al ambiente.

La administración de Joe Biden se encuentra con la necesidad de repensar esas estrategias antidrogas concentradas en la erradicación forzada y la guerra a los campesinos y pequeños

productores en territorios étnicos. La erradicación militar que dice haber arrancado las matas de coca en 300.000 hectáreas desde el año 2017 al 2020, se ha mostrado como un fracaso. En las cuentas de ONUDC sólo ha significado la disminución de 16.000 hectáreas en ese periodo con aumento en la producción de cocaína por incremento en la productividad. En tanto la aspersión aérea con glifosato choca con múltiples restricciones, entre las cuales están las disposiciones constitucionales y legales que la ubican como última opción y condicionada a que se impulse de buena fe programas concertados incluidos en medidas concretas de reforma rural integral. Además, está prohibido en Colombia que se hagan esas fumigaciones en Zonas de Reserva Forestal, parques naturales, territorios étnicos, lo mismo que en condiciones de riesgo para fuentes de agua, cultivos, animales domésticos y por supuesto encima de la gente. Esto significa que si se actúa en la legalidad la aspersión aérea podría hacerse sólo en una pequeña porción de cultivos y con costos exorbitantes.

Por supuesto que en la agenda completa con Estados Unidos hay muchos temas adicionales a los contenidos del Acuerdo de Paz, que de alguna manera se relacionan con su implementación, pero con rutas propias. Ya se han señalado los que tienen que ver con la grave crisis asociada a la pandemia y las inciertas perspectivas de la mal llamada ‘nueva normalidad’; también se ha mencionado lo relativo al cambio climático, a las energías renovables, al retorno al multilateralismo, a las vías diplomáticas y pacíficas para abordar conflictos internacionales.

Aquí pongo el acento en la agenda para la paz para destacar que en las nuevas condiciones se puede intentar un diálogo con sociedad civil en los Estados Unidos, con sectores del Congreso y con la nueva administración, para que se tenga en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz de 2016, el marco mayor de las políticas de cooperación con Colombia.

Camilo&indepaz.org.co. www.indepaz.org.co